

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : INÉS GENOVEVA BRUGES DE MARTÍNEZ
DEMANDADOS : FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-001-31-05-004-2017-00656-01
RADICADO INTERNO : 354-23
DECISIÓN : MODIFICA AUTO
ACTA NÚMERO : 372

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

ANTECEDENTES

Mediante auto del veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023) el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, liquidó las costas en la suma de \$1.280.000 correspondiente a:

- Las agencias en derecho en primera instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A en la suma de \$700.000
- Las agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A en la suma de \$580.000 (expediente digital 21).

Frente a lo anterior, la apoderada de la parte accionada Protección S.A, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, manifestado que el auto que liquida las costas se ajusta a lo establecido en el numeral 1º del art. 365 del CGP, pues al ser vencida la demandante, es a su cargo la condena en costas procesales. Sin embargo, considera que en primera instancia se equivocan al realizar la liquidación y aprobación de las costas procesales frente al valor, ello es, \$700.000 como agencias en derecho en primera

instancia y \$580.000 como agencias en derecho en segunda instancia, dado que dicho valor no se ajusta a los numerales 3 y 4 del art. 366 del CGP aplicables por analogía en materia laboral, y en ese sentido, se remite al art. 5º del Acuerdo No PSAA16-10554 de 2016, en donde se determinan los parámetros para liquidar las agencias en derecho, resaltando el literal b) del art. 5º que indica “b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”

Que teniendo en cuenta que la pretensión de la demandante se dirigía a que se declarara que la demandante, en calidad de madre dependiente económicamente, tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su hija; se condenara a la sociedad Protección S.A, al pago de la pensión de sobrevivientes, intereses moratorios o en susidio la indexación; y el pago de costas procesales, pero como no es susceptible de determinarse la cuantía en forma exacta sino hasta el momento del pago, se debía tener en cuenta:

- La duración del proceso: el cual inició el 27 de julio de 2017 y a la fecha de presentación del recurso, lleva 6 años.
- La calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado: resaltando que Protección S.A ha realizado las actuaciones procesales en forma ágil y eficaz, ha actuado en forma diligente y cuidadosa sin dilatar el proceso.
- La cuantía del proceso: se trata de mayor cuantía según las pretensiones.
- Circunstancias especiales: la accionada debió pagar honorarios profesionales a la apoderada por 6 años, pese a haber actuado conforme a la ley.

Así mismo, solicita que se tenga en cuenta para la liquidación y aprobación de las costas procesales, los principios de comprobación, utilidad, legalidad y razonabilidad.

En ese orden de ideas, solicita que la condena en costas en segunda instancia a cargo de la demandante, sean modificadas y aumentadas, pues las agencias en derecho impuestas en primera instancia no están ajustadas a derecho, de acuerdo con los factores de duración del proceso, la calidad y la duración de

las gestiones realizadas por el apoderado, la cuantía del proceso, las circunstancias especiales, los principios de comprobación, utilidad, legalidad y Razonabilidad y se debieron fijar conforme el Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016. Y las agencias en derecho en segunda instancia se encuentran mal liquidadas de conformidad con el acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el cual establece que, la liquidación de la condena en costas en segunda instancia, debe ser de 1 a 6 SMLMV, y se condenaron por un valor inferior a lo establecido en dicho acuerdo, esto es a \$580.000, siendo este un valor por debajo del mínimo, que es un salario mínimo y asciende a la suma de \$1.160.000, y como suma máxima daría \$6.960.000, que corresponde a 6 salarios mínimos (expediente digital 22).

En auto del 12 de octubre de 2023, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín **no repuso el auto del 24 de agosto de 2023** por considerar que en aplicación del art. 366 del CGP y art. 5º del Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el Juzgado al tasar las agencias en derecho, tuvo en cuenta que se trataba de una pensión de sobreviviente y la parte débil de la relación jurídico procesal era la parte demandante, la cual además elevó las pretensiones aduciendo la dependencia económica del causante, lo que fue considerado para fijar las agencias en derecho en la suma de \$700.000 en contra de la parte demandante. Y señaló que la tasación de las agencias en derecho es de carácter facultativo y al ser tasada las costas el Juez debe tener en cuenta *“la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales”*, considera que no hay lugar a su modificación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Por su parte Protección S.A presenta escrito de alegatos en el que reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Se centra el problema jurídico en determinar si hay lugar a modificar y aumentar el valor de las agencias en derecho fijadas en primera instancia y en segunda instancia conforme los parámetros planteados en el Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Al respecto, el numeral 4º del artículo 366 del CGP, dispone:

“3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas ...”.

El ACUERDO No. PSAA16-10554 establece en sus artículos 2º y 5º los criterios y la tarifa dentro de los topes mínimo y máximo en el que se debe mover el juez a la hora de hacer la liquidación de las agencias, para fijar las agencias así:

“ARTÍCULO 2º. Criterios. *Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.”*

“ARTÍCULO 5º. Tarifas. *Las tarifas de agencias en derecho son:*

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.

a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.

b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.

En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”

Partiendo de lo anterior y atendiendo a la *naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes*, considera la Sala, que el auto objeto de apelación debe MODIFICARSE, teniendo en cuenta que se trata, conforme ya se advirtió, de un proceso donde:

- Se presentó demanda y se sometió a reparto 10 de julio de 2017 (expediente digital 01)
- En la demanda se solicitó se declarara que la demandante, en calidad de madre dependiente económicamente, tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su hija; se condenara a la sociedad Protección S.A, al pago de la pensión de sobrevivientes, los intereses moratorios o en susidio la indexación y las costas procesales.
- La apoderada de Protección S.A actuó diligentemente en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, decreto de pruebas, trámite y juzgamiento.
- En primera instancia, se obtuvo una sentencia desfavorable a los intereses de la parte actora, por no acreditarse la dependencia económica. Decisión que fue apelada por la parte demandante.
- El 8 de mayo de 2023 se profirió sentencia de segunda instancia, confirmando la sentencia de primera instancia.
- Y el proceso tuvo una duración aproximadamente de seis (6) años dos (2) meses y quince (15) días aproximadamente, entre la fecha de presentación de la demanda hasta la liquidación de las costas.

Razones por las cuales considera la Sala que **las costas impuestas no se ajustan a la justicia y al derecho**, bajo el entendido que el literal b) del art. 5º del Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 reza:

“1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

(...)

En primera instancia

(...)

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.

En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”

En ese sentido, como las agencias en derecho en primera instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A se fijaron en la suma de \$700.000 y el salario mínimo legal para el año 2022 (fecha en que se profirió

la sentencia) era de \$1.000.000, ello implica que se estableció por debajo del establecido en el Acuerdo No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

Y en igual sentido, como las agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A se fijaron en la suma de \$580.000 y el salario mínimo legal del año 2023 (fecha en que se profirió la sentencia) es de \$1.160.000, ello implica que se estableció por debajo de los parámetros del Acuerdo, No PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

En virtud de lo anterior, se MODIFICARÁ el auto apelado y se fijaran como costas procesales a cargo de la demandante y a favor de la sociedad Protección S.A, la suma de \$2.160.000, de las cuales:

- Las agencias en derecho en primera instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A corresponden a la suma de \$1.000.000
- Las agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A corresponden a la suma de \$1.160.000

Sin costas en esta instancia.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la providencia impugnada de fecha y origen conocidos, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar MODIFICAR el auto apelado y fijar como costas procesales a cargo de la demandante y a favor de la sociedad Protección S.A, la suma de \$2.160.000, de las cuales:

- Las agencias en derecho en primera instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A corresponden a la suma de \$1.000.000

- Las agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte demandante y en favor de Protección S.A corresponden a la suma de \$1.160.000

SEGUNDO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: La presente decisión se notificará por ESTADOS.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 215 del 14 de
diciembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>